

Imprimir

Esta semana presenta dos acontecimientos importantes, el primero está referido a la apertura de la nueva legislatura, en donde se destaca la radicación del proyecto de ley por el cual se crea la renta básica universal, que fue discutido el 11 y 12 de marzo en la Cumbre Social y Política por la Renta Básica Permanente Ya, por más de dos mil delegados y participantes de organizaciones de todo el país. El proyecto de ley se radicó con el respaldo de 51 parlamentarios de 10 partidos políticos, tuvo el respaldo de 584 organizaciones sociales de la sociedad civil, y 4110 ciudadanos, en el cual se crea el programa de Estado renta básica universal, que subsumiría los actuales programas de transferencias monetarias, como jóvenes en acción, familias en acción, adulto mayor, e ingreso solidario. La propuesta pretende que sean entregadas a un grupo de 7,46 millones entre los más bajos ingresos monetarios, una suma de 320 mil cuando el hogar está constituido por una persona, y hasta 470 mil pesos en un hogar de 4 integrantes o más. Esta propuesta tendría un costo de 3,7 % del PIB al año, que es una suma bastante factible. Esto constituye una urgente política frente a la profunda crisis social y económica en la que está sumido el país por sus acumulados estructurales y agravada por el Sars Cov Covid19.

Esta propuesta se presenta de manera oportuna en un momento en el cual Colombia no logra adquirir el ritmo de vacunación requerido para el logro de la inmunidad de rebaño, el día de ayer con inaudita celebración, el gobierno dio cuenta que se habían logrado un millón de inoculaciones, esto sólo debería generar preocupación, porque la vacunación inició el 17 de febrero, lo que supone que un mes después se han aplicado en promedio de 34 mil dosis diarias, cuando el país debería estar aplicando 200 mil dosis diarios, dado que la mayoría de vacunas, requieren dos dosis. Ante estos malos resultados, el Ministerio de Salud ha tenido que aceptar que las EPS no tienen un sistema de información con caracterización epidemiológica y sociodemográfica para identificar a la población afiliada, esto fue corroborado por los tozudos hechos de la precaria vacunación de los mayores de 80 años, en donde tuvieron que aceptar que estos se acerquen a los centros de atención y se vacunen directamente, así debió ser desde el primer momento, y así debería ser el resto del desarrollo de vacunación, pero eso implicaría que admitan que las EPS no cumplen ninguna función en este plan, y por tanto no deberían estar intermediando el manejo de los recursos públicos destinados para el propósito de la vacunación.

En ese mismo contexto, otro anuncio descabellado del Ministerio consiste en entregar al sector empresarial unas vacunas para que sean aplicadas a su sector, esto implica el reconocimiento del fracaso de un plan de vacunación que debería y podría estar a cargo del sistema de salud como en el mundo entero. La apertura de un boquete para que se presente acaparamiento de vacunas que llegan al país en manos de quienes puedan comprarlas, eso rompe cualquier principio de la salud pública, que debe propender por el acceso equitativo y universal a la vacuna. Este anuncio se presenta en el contexto que de las vacunas que se encuentran en el país, solo se han aplicado el 40%, un resultado nada alentador, pero esto no se resuelve entregando funciones de vacunación a bancos y a empresarios, esto se resuelve con un rediseño del fallido plan de vacunación, el modelo chileno puede servir de apoyo, en donde las municipalidades y los entes territoriales asumieron la vacunación, de manera directa, sin intermediarios que estén manejando listados. Un único responsable, que debería ser el ente territorial que asuma la vacunación, es absurdo manejar un plan de vacunación distribuyendo las mismas funciones entre 1300 secretarías municipales de salud, 32 departamentales, 18 mil clínicas privadas, 900 hospitales públicos y 49 EPS, estas últimas eso sí, manejando los recursos públicos. Este absurdo explica que todavía tengamos médicos de primera línea sin vacunar.

La situación es en extremo preocupante desde el punto de vista sanitario y el impacto económico, social y en vidas que puede tener una tercera ola. En Chile se han aplicado más de 5 millones de dosis, teniendo uno de las mejores tasas de vacunación en el mundo, y ente este momento enfrenta varias medidas de confinamiento porque de nuevo enfrentan una ola, en que el virus esta generando alta morbilidad en población joven con requerimiento de UCI, la situación es crítica, en tanto es un país que lejísimos de Colomba ha avanzado en la vacunación.

No es nada alentador que en Colombia con logros pírricos, que no compensan las pérdidas y el pobre nivel de gestión y de políticas públicas que requiere una pandemia, lo que nos tiene con una de las mortalidades más altas del mundo por 100 mil habitantes por Covid19, se persista en la peligrosa lógica de la gran prensa, de aunar la celebración y el show del gobierno nacional, que da tumbos y se estrella permanentemente con la realidad tozuda de

la mediocre gestión. No puede ser posible que en medio de esta situación sanitaria se continúe sin hacer el número de pruebas PCR y de antígenos diarias necesarias, se han llegado a realizar por día hasta 20 mil pruebas PCR, nunca se ha llegado a ejercer la capacidad instalada de 55 mil para procesar un número mayor, y este es un elemento epidemiológico central para el manejo sanitario de la pandemia. Vamos con los ojos cerrados enfrentando un virus que está generando nuevas cepas con mayor nivel de contagiosidad.

En ese contexto es que el Congreso de la República reabrió su nueva legislatura, en donde la única acción esperanzadora que se vislumbra es la radicación del proyecto de ley de renta básica de iniciativa ciudadana, ante la tozudez del gobierno de continuar adelante con el proyecto de ley 010 en donde pretenden continuar con la privatización y la profundización del actual modelo de salud, que no ha podido responder ni para hacer unas pruebas, y la impopular reforma tributaria que preparan. Pareciera que no se ocuparan de construir país y salidas, sino de poner todos los elementos para impulsar un estallido social, por la asfixia ciudadana frente a la profunda crisis. Continuaremos muy atentas al debate de salud y tributario que se proponen adelantar, también desde la sociedad civil adelantamos nuestras propias propuestas.

Carolina Corcho Mejía, Médica psiquiatra, presidenta de la Corporación Latinoamericana Sur, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana